



¿Qué piensan los argentinos sobre el Estado?

RODOLFO ELBERT (CONICET/IIGG-UBA)
Y FLORENCIA MORALES (CONICET/IIGG-UBA)
15 DE JULIO DE 2022

El rol de las políticas públicas en la pandemia¹

El jueves 16 y viernes 17 de junio se llevó a cabo en el Hotel Bella Vista el Seminario “Estructura social de Argentina en la pospandemia: efectos de la doble crisis y recomposición en disputa” del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social de Argentina (PIRC-ESA). En este encuentro, investigadores e investigadoras de distintas universidades del país presentaron los resultados preliminares de los análisis del

¹ Este artículo fue realizado en el marco del “Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y postpandemia”, financiado por la AGENCIA-FONCYT.

impacto de la pandemia en la estructura social argentina, que saldrá publicado en los próximos meses.

Nuestro trabajo consistió en un análisis estadístico de las opiniones de las y los argentinos sobre las políticas gubernamentales implementadas durante la pandemia. Los datos fueron extraídos de la “Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por Covid19 (ESAyPP/PISAC-Covid19)”, relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021, y comprendió a los hogares y la población adulta residente en localidades del país mayores a cincuenta mil habitantes.

En las últimas décadas, un eje clave de la opinión pública de las y los argentinos ha sido la denominada “grieta”, es decir, la polarización ideológica de la sociedad sobre distintos temas políticos, económicos y sociales. Uno de los debates centrales puede pensarse desde la pregunta por el rol del Estado en la regulación de la economía, la provisión de servicios públicos y el sostenimiento de derechos económicos y sociales de sectores económicamente vulnerables. ¿Debe el Estado intervenir en la economía y la sociedad?

Al analizar el grado de acuerdo que manifestaron las y los argentinos sobre las políticas de contención sobre el impacto de las restricciones sanitarias en el mercado de trabajo y los ingresos de la población durante la pandemia, hallamos un amplio nivel de acuerdo de toda la sociedad, teniendo en cuenta distintas posiciones sociales. La gran mayoría de las políticas cuentan con un 50% o más de acuerdo, habiendo casos que superan el 80%. La política que mayor aprobación obtuvo de manera significativa respecto al resto ha sido el congelamiento de alquileres y tarifas, donde hallamos que ocho de cada diez personas encuestadas acordó con la medida. Por otra parte, el IEGF fue la medida que menos grado de acuerdo obtuvo, con un promedio del 60% considerando toda la muestra. Esto resulta consistente con los resultados del Informe Especial COVID-19 (2020) realizado por la Universidad de San Andrés,² que relevó un nivel de aprobación del 84% con las medidas temporales implementadas por el Gobierno (51% respondieron “Muy de acuerdo” y 33% “Algo de acuerdo”).

Tabla 1. Grado de acuerdo según posiciones sociales con las políticas públicas gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 en la Argentina.

Posiciones sociales	Políticas públicas implementadas					N° total
	IFE	ATP	Doble indemnización	IEGF	Congelamiento de alquileres y tarifas	
Empleadores/as	69,5	68,9	47,9	55,7	70,1	113
Profesionales autónomos/as	67,7	71	61,1	53,1	73,1	297
Gerentes/as	57,7	62,1	51,6	41,5	61,6	161
Supervisores/as	69,1	66,6	71,1	62,4	83	325
Profesionales asalariados/as	75,1	69,6	74,4	61,4	85,8	742
Trabajadores/as formales	68,9	69,2	70,9	60	78,9	1.194
Trabajadores/as informales	83,7	66,4	71,9	61,8	83,4	1.163
Cuentapropismo informal	70,4	65	66,8	60,8	76,7	829

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAYPP/PISAC-Covid19 (2021).

Al observar los grados de acuerdo según las diferentes posiciones sociales identificamos dos grupos con tendencias similares. Por un lado, empleadores/as, profesionales autónomos/as y gerentes/as fueron los que menos niveles de acuerdo manifestaron tener con las medidas implementadas, salvo el caso del ATP [Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción] que tuvo mayor acuerdo entre empleadores/as y profesionales autónomos/as. Esto puede explicarse al ser una medida que apuntaba al sostenimiento del empleo privado de empresas nacionales donde el Estado se hacía cargo de una parte del salario de las y los trabajadores. Por otro lado, supervisores/as, profesionales asalariados/as, trabajadores/as formales, informales y cuentapropistas informales conforman otro grupo, que manifestaron un acuerdo mayor con las políticas implementadas durante la pandemia. Esto se ve expresado en los grados de acuerdo con congelamiento de alquileres y tarifas, que ronda entre el 77% y 86% de aprobación aproximado. También en el caso del IEGF [Impuesto de Emergencia a las Grandes Fortunas], donde mostraron niveles más elevados de acuerdo que el grupo anterior, rondando entre 60% y 62%, y la doble indemnización que entre los segmentos asalariados ronda entre el 71% y 74% de acuerdo aproximado.

Otro dato interesante fue el caso de los gerentes/as, quienes manifestaron los niveles más bajos de acuerdo con la gran mayoría de las medidas implementadas. Mientras que empleadores/as fueron los que menor acuerdo expresaron en comparación a todo el resto con la doble indemnización. Por otra parte, las y los profesionales asalariados y trabajadores/as informales fueron los que mayores niveles de aprobación han expresado respecto al conjunto de medidas implementadas. En relación con el IFE [Ingreso Federal de Emergencia], las y los trabajadores informales han sido los que mostraron un apoyo significativamente mayor al resto de todas las otras posiciones (83,7%), lo cual podría explicarse por haber sido la principal población beneficiaria de la medida. Cabe destacar que, en el marco de la profunda crisis social y económica desatada por la pandemia, más de once millones de personas solicitaron el IFE. Sin embargo, su implementación estuvo muy por debajo de esa cifra. Según un informe elaborado por el Ministerio de Economía, 7.854.316 personas lo recibieron en dos etapas. En este punto, la encuesta no ha llegado a indagar además del nivel de aprobación con las medidas efectivamente implementadas si se hubiese estado de acuerdo con la necesidad de la aplicación de medidas complementarias.

El trabajo también incluyó preguntas sobre grados de acuerdo de implementación de ciertas medidas de redistribución socioeconómica a futuro: disminuir los impuestos a las grandes empresas y a las pymes, mayores impuestos a la riqueza y una renta universal para sectores vulnerables. Esta última ha sido una de las medidas con mayor aprobación, principalmente dentro de las y los trabajadores informales. Por el contrario, y siguiendo la tendencia anterior, las y los gerentes fueron los que menor nivel de acuerdo manifestaron con esta medida. Otro dato relevante ha sido la diferencia significativa en los niveles de acuerdo con la medida de disminución de impuestos a las grandes empresas, que representó un promedio general del 23% aproximado entre toda la muestra. En líneas generales podemos afirmar que la sociedad argentina no considera que los beneficios a las grandes empresas sea una medida necesaria a implementar a futuro.

Tabla 2. Grado de acuerdo de las posiciones sociales con la implementación de políticas públicas a futuro en la Argentina.

Posiciones sociales	Políticas públicas para implementar a futuro				N° Total
	Disminuir impuestos a las grandes empresas	Disminuir impuestos a las pymes	Mayores impuestos a la riqueza	Renta universal	
Empleadores/as	27,9	80,7	43,8	54,9	113
Profesionales autónomos/as	34	73,3	46,3	57,9	297
Gerentes/as	29,2	70,1	42,1	37,2	161
Supervisores/as	25	83,3	60,3	60,9	325
Profesionales asalariados/as	22,8	78,4	59,9	66,6	742
Trabajadores/as formales	24,1	65,3	56,5	59,8	1194
Trabajadores/as informales	19,8	55,7	53,2	70,8	1163
Cuentapropismo informal	20,8	65,3	53,5	65,2	829

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-Covid19 (2021).

En líneas generales podemos decir que en un contexto signado por discursos que sostienen la necesidad de la reducción del gasto público y de los impuestos, como así también del cuestionamiento de la intervención estatal en la economía, hemos hallado un amplio consenso de la sociedad argentina acerca de la implementación de políticas para mitigar las consecuencias de la pandemia, como así también un consenso sobre el que trabajar para el diseño e implementación de medidas futuras orientadas a la redistribución socioeconómica. Tal es el caso del debate sobre una renta universal, propuesta que hace unos años podría haber resultado excéntrica, y actualmente se ha convertido en una discusión en la agenda política.

Algunas conclusiones preliminares

El presente documento analizó las evaluaciones de los/as encuestados/as respecto de diferentes políticas públicas llevadas adelante durante la pandemia de COVID-19 en la Argentina. En términos generales, encontramos un alto grado de acuerdo con las políticas orientadas a una protección social de la población trabajadora durante la pandemia. Más allá de ciertos discursos mediáticos respecto de un supuesto consenso antiestatista en la Argentina actual, nuestros datos confirman que las miradas favorables a la intervención del Estado durante la pandemia fueron abrumadoramente mayoritarias. En particular, personas pertenecientes a determinadas clases sociales como el proletariado formal, informal y los expertos fueron los que más apoyo brindaron a este tipo de medidas.

A modo de conclusión podemos decir que el efecto de la clase objetiva se mantiene incorporando estas diferentes variables y que el efecto individual de las variables nos indica que el grupo más estatista está compuesto por mujeres jóvenes y de clase trabajadora. En términos generales, la variable independiente más poderosa para explicar variaciones en el IEM es la orientación política de la persona, siendo que las personas identificadas con el peronismo o la izquierda mostraron un apoyo significativamente mayor a la intervención del Estado.